

COMENTARIOS DE ORANGE A LA CARTA SOBRE DERECHOS DIGITALES

Consideraciones Generales

En primer lugar queremos agradecer a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (en adelante, SEDIA) el esfuerzo realizado en aglutinar en un solo documento una primera versión de lo que entiende debería considerarse como Carta de Derechos Digitales, recopilando en ella los derechos de los ciudadanos en el entorno digital y definiendo un marco de principios para la protección de los mismos.

Orange está de acuerdo con la configuración de este texto como una Carta de Derechos y no como un texto con carácter normativo. Como ya expusimos en la respuesta a la Consulta anterior, la mayoría de los derechos que en ella se contenían eran ya derechos protegidos y recogidos en el mundo analógico (algunos, incluso, en el entorno digital), y que lo único que era necesario realizar era garantizar su protección en el mundo digital. Elaborar un nuevo texto normativo para recoger un listado de derechos digitales aumentaría la dispersión normativa existente en la actualidad además de la posibilidad de dejar fuera algún derecho que pudiera surgir con la evolución a la que está sometido el mundo digital en nuestros días. Por tanto, como comentario general, agradecer que no se haya elaborado un nuevo marco normativo específico y que se haya configurado como un conjunto de principios y derechos, que deben guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas, de forma que se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales.

Comentarios específicos a la Carta de Derechos Digitales

En cuando a los derechos recogidos dentro del capítulo de “Derechos de Libertad”, Orange está de acuerdo con que los **derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución**, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España deban estar garantizados y protegidos en el entorno o espacio digital.

De igual forma, el **derecho a la protección de los datos de carácter personal deben estar protegidos en el espacio digital**. Así, estos datos deberán tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo tenga previsto por la ley. De igual forma debe

garantizarse que toda persona tenga derecho a acceder a los datos que se tenga recogidos sobre su persona y a obtener su rectificación.

También consideramos adecuado el reconocimiento del **derecho a la propia identidad en el entorno digital**, y que ésta no pueda ser alterada, controlada o manipulada por terceros en contra de su propia voluntad.

El Derecho a que, de acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles, los entornos digitales permitan el acceso en condiciones de **pseudonimidad**, en los casos y con las garantías previstos por el ordenamiento jurídico, también debe ser un derecho protegido en un entorno digital, al igual que el **derecho a no ser objeto de localización**, ni a ser sometido a análisis de la personalidad o conducta que impliquen **el perfilado de la persona**. A este respecto, Orange confía en que cualesquiera desarrollos de este derecho tendrán en consideración el valor que para nuestra economía supone la cada vez más floreciente industria del dato en el mundo, asegurando a un tiempo la debida protección de las personas y la competitividad de la empresa española en Europa y en el mundo.

Respecto al derecho a la seguridad digital, Orange entiende que, en dicho entorno, resulta imposible “garantizar” ésta en términos absolutos, por lo que confía en que el legislador optará por un planteamiento más ajustado a la realidad, regulándose esa seguridad digital como una obligación de medios y no de resultados, en la que cada uno de los partícipes en las relaciones digitales (incluyendo los propios usuarios), adopte las medidas de seguridad que resulten razonables, atendiendo al papel que desempeña en dicho entorno.

Por otra parte, la Carta de Derechos Digitales recoge un apartado segundo relativo a los Derechos de Igualdad. En este capítulo quedan comprendidos el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital; la protección de menores; protección de personas con discapacidad en el entorno digital; y la protección de las personas mayores en el mencionado entorno. Aunque todos ellos son necesarios y bien recibidos, creemos que esta enumeración debería ser lo suficientemente amplia para garantizar, - si las circunstancias así lo aconsejan -, la protección de otros posibles nuevos colectivos que en el futuro puedan verse igualmente afectados o quedar apartados de las oportunidades que brinda el pujante mercado digital.

Con respecto al **derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital**, se prevé que los poderes públicos garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones, atendiendo particularmente a la brecha territorial y asegurando un derecho de acceso universal asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población. A este respecto, Orange considera que el apoyo decidido de la Administración para facilitar

los despliegues de infraestructuras constituye una pieza clave para alcanzar el objetivo de igualdad perseguido, por lo que Orange confía en que los futuros desarrollos normativos tendrán igualmente presentes las trabas que todavía se encuentran hoy en día los operadores de redes de telecomunicaciones a la hora de llevar a efecto los tan necesarios despliegues de infraestructuras. En cualquier caso, es conocida la firme apuesta de Orange por la eliminación de barreras, tanto territoriales como sociales, de acceso a Internet, mediante acciones de apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, como la de “Gigas Solidarios”, lanzada durante el periodo de confinamiento para que los menores en riesgo de exclusión pudiera conectarse y terminar el colegio, o la “tarifa social” lanzada el pasado mes de septiembre, y disponible para las personas que estén recibiendo el ingreso mínimo vital y se encuentren en riesgo de exclusión.

En cuanto a la **protección de menores en el entorno digital**, Orange está de acuerdo con la necesidad de que los progenitores, tutores, curadores o representantes legales deban procurar un uso equilibrado y responsable de los dispositivos a fin de garantizar un desarrollo adecuado de la personalidad de los menores. En este sentido, Orange está muy comprometido con esta protección de los menores y por ello ha lanzado, como política de responsabilidad corporativa, un programa de educación denominada “por un uso love de la tecnología” (<https://usolovedelatecnologia.orange.es/>) donde se incluyen numerosos videos que ayuda a la sociedad en general a inculcar un uso razonables y responsable del entorno digital. Además, Orange suscribió en noviembre de 2019 una carta de derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes, propuesta por la Fundación ANAR y a la que se adhirieron además, la AEPD y las organizaciones DigitalES, Adigital e IAB que representan el sector tecnológico en España.

De igual forma, compartimos la necesidad de que tanto los centros educativos como cualquier entidad que realice actividades en entornos digitales en la que participen menores, protejan sus derechos fundamentales, especialmente, el derecho a la protección de sus datos personales y se les proteja, igualmente, de cualquier práctica de perfilado susceptible de manipular o perturbar la voluntad de los menores y, en particular, la publicidad basada en este tipo de técnicas.

En lo que respecta a la **protección de personas con discapacidad en el entorno digital**, se prevé que se debe garantizar la accesibilidad de los entornos digitales a las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista tecnológico como respecto de sus contenidos. En particular, se prevé que se debe asegurar que la información relativa a las condiciones legales del servicio resulte accesible y comprensible. De igual forma se prevé que se debe asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad y el derecho a la educación digital de personas igualmente con discapacidad.

Orange está completamente de acuerdo con la necesidad de adoptar medidas por las que se garantice, en todo caso, la protección de las personas con discapacidad en

cualquier tipo de entorno, tanto digital como analógico. En ese sentido, Orange entiende que cualquier normativa de desarrollo deberá sopesar las medidas que económicamente resulten más razonables y eficiente para alcanzar esos resultados, evitando a las empresas españolas incurrir en costes desproporcionados que mermen su competitividad en un entorno digital sin fronteras. A modo de ejemplo, Orange ha tenido conocimiento de una proposición no de Ley presentada por el Senado al Congreso de los Diputados en el que se solicita la lectura fácil para las personas con discapacidad cognitiva. Aun siendo completamente legítimo el fin que se pretende obtener, la medida supone una dificultad técnica y un coste económico desproporcionado para las empresas, cuando el mismo fin puede obtenerse por ejemplo poniendo en el servicio de atención al cliente agentes especializados para poder realizar una “explicación fácil”, en lugar de una “lectura fácil” como se solicita, que además es mucho más beneficioso para las personas con discapacidad. Por tanto, estando completamente de acuerdo con la medida propuesta de proteger a las personas con discapacidad en el entorno digital, Orange entiende que estas medidas deben consensuarse con los sujetos obligados para que las mismas se impongan de la manera más eficiente posible.

En cuanto al tercer apartado, relativo a los derechos de participación y de conformación del espacio público, en el que se encuentra el **derecho a la neutralidad de Internet**, el **derecho a la libertad de expresión y libertad de información**, el derecho a la **participación ciudadana por medios digitales**, el **derecho a la educación digital**, y los **derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas**, Orange únicamente considera necesario recalcar la necesidad de que el derecho a la neutralidad de red se regule en la presente Carta de Derechos Digitales puesto que ya se encuentra regulado y es aplicable plenamente al entorno digital.

Con respecto al capítulo cuarto, relativo a los derechos del entorno laboral y empresarial, se recogen tanto los derechos en el ámbito laboral como la empresa en el entorno digital.

En cuanto a los **derechos en el ámbito laboral**, en el que se prevé la desconexión digital, la protección de la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a disposición del empleador, así como frente al uso de dispositivos de video vigilancia y de grabaciones de sonidos en el lugar de trabajo, sistemas de geolocalización, Orange considera que sería deseable que la Carta de Derechos Digitales también se hiciese eco del necesario equilibrio entre los legítimos derechos de los trabajadores y aquéllos de la empresa, no sólo por lo que se refiere a sus facultades de control ya recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, sino sobre todo, de cara a los cada vez mayores riesgos en materia de ciberseguridad que plantea la digitalización del trabajo. Efectivamente, Orange entiende que una incorrecta configuración de esos legítimos y deseables derechos digitales podría colocar a las empresas y a otros ciudadanos en situaciones

de alto riesgo, por ejemplo, si en aras a proteger la intimidad de los trabajadores se impide al empresario rastrear y detectar posibles nuevas vulnerabilidades en los dispositivos de empleados (facilitando así a los ciberdelincuentes acceder a nuevos vectores de ataque a los sistemas de las empresas). Por ello, Orange considera que la Carta de Derechos Digitales debe modular los principios que rigen este derecho, de tal forma que la normativa de desarrollo tome en consideración igualmente la protección de los activos empresariales.

De igual forma se prevé que sin perjuicio del **derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada**, se informará a los representantes de los trabajadores y las personas directamente afectadas sobre el uso de la analítica de datos o sistemas de inteligencia artificial en la gestión, monitorización y procesos de toma de decisión en materia de recursos humanos y relaciones laborales. En este sentido, Orange considera que las medidas que se adopten siempre tienen que ser basadas en el principio de proporcionalidad y en el estado de la ciencia en el momento de adoptar determinadas medidas y no anticiparse poniendo obligaciones ante situaciones venideras en el futuro. Asimismo, Orange entiende que, incluso si finalmente se acordase la necesidad de aprobación previa de sistemas algorítmicos, es preferible no incorporar tal requerimiento en la Carta de Derechos Digitales, no sólo porque va más allá de la definición de un principio (teniendo un carácter normativo indirecto), sino sobre todo, por la inseguridad que genera la falta de concreción de un procedimiento de aprobación que podría llegar a revelarse incluso innecesario a futuro (por ejemplo, si mediante fórmulas de autorregulación sectorial se alcanzan objetivos similares que favorezcan la agilidad y la competitividad).

Por último, se incorpora un capítulo relativo a los derechos digitales en entornos específicos en el que se incorpora el derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo, el derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible, el derecho a la protección de la salud en el entorno digital, la libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital, derecho ante la inteligencia artificial, y derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías. Sobre estos derechos, Orange considera que tales derechos deberían abordarse de manera mucho más amplia para que sirvan realmente como principios inspiradores, no prejuzgando desde ya sobre tecnologías que están a día de hoy en un estado incipiente de desarrollo, como es el caso de la inteligencia artificial. En materia de nuevas tecnologías e innovación, Orange considera que lo más razonable es abordar cualesquiera derechos digitales desde la propia normativa de desarrollo y no mediante esta Carta de Derechos Digitales, de tal forma que, - dependiendo del estado de la tecnología en cada momento -, puedan valorarse cuáles han de ser los derechos susceptibles de protección. A modo de ejemplo, hasta hace pocos años no

se debatía sobre la posibilidad de que una inteligencia artificial pudiese llegar a ser sujeto de derecho, y sin embargo, el Parlamento Europeo ya ha abierto recientemente las puertas a dicha posibilidad, si bien de manera todavía remota; sin embargo, hasta que inteligencias artificiales con ese grado de complejidad no se desarrollen, es muy probable que no seamos capaces de atisbar con certeza las posibles implicaciones legales de las mismas, ni de valorar adecuadamente la mejor forma de proteger los derechos digitales de las personas afectadas por tales tecnologías. De ahí que sea conveniente que los principios que se recojan en la Carta de Derechos Digitales no se conviertan en barreras al posterior análisis que corresponderá hacer al legislador al momento de regular sobre estos temas.